

JT 2004\370

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Castilla y León, Burgos, núm. 62/2004 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 13 febrero

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso contencioso-administrativo núm. 491/2001.

Ponente: Ilma. Sra. D^a. Concepción García Vicario.

TRIBUTOS-GESTION: Comprobación de valores: dictamen del perito de la Administración: motivación mediante remisión del contribuyente a los registros fiscales o estudios de mercado realizados por la propia administración tributaria: requisitos para su admisibilidad: examen: diferenciación entre procedimientos tributarios sometidos a la regulación anterior y posterior a la Ley 1/1998, de 26 febrero; necesidad de aportación: examen de la doctrina jurisprudencial; motivación insuficiente: falta de consignación de los procedimientos concretos de aplicación, ponderación, actualización, extrapolación o individualización de los valores unitarios aplicados: retroacción de actuaciones procedente; impugnación: admisibilidad de informe pericial en vía jurisdiccional: procedencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Castilla y León (Burgos) estima en parte el recurso contencioso-administrativo formulado contra Resolución del TEAR Castilla y León de 28-05-2001, desestimatoria de reclamación económico-administrativa núm. 40/581/1998 interpuesta contra acuerdo de comprobación de valores a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En la Ciudad de Burgos a trece de febrero de dos mil cuatro.

En el recurso Contencioso-Administrativo numero 491/01 interpuesto por Don Ricardo representado por la Procuradora Doña Carmen Velázquez Pacheco y defendido por Letrado, contra la resolución del TEAR de Castilla y León, Sala de Burgos de 28 de mayo de 2001, desestimando la reclamación económico administrativa 40/581/98 interpuesta por el recurrente contra la resolución del Servicio de Economía y Hacienda de la Delegación Territorial de Segovia de la Junta de Castilla y León aprobatoria del expediente de comprobación de valores NÚM. 8753/94, por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, fijando un valor comprobado de 25.344.101 Pesetas (152.321,11 euros) con indicación de que concurren las circunstancias a que se refiere el art. 14.7 del RD Leg. 1/93, de 24 de septiembre (RCL 1993\2849) ; habiendo comparecido como parte demandada la Junta de Castilla y León representada y defendida por letrado de dicha comunidad autónoma Don Mariano Nieto Echevarría en virtud de la representación que por Ley ostenta.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Por la parte demandante se interpuso recurso Contencioso-Administrativo ante esta Sala el día 5-10-01.

Admitido a trámite el recurso y no habiéndose solicitado el anuncio de la interposición del recurso, se reclamó el expediente administrativo; recibido, se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 31-1-02 que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte sentencia por la que «... anule la resolución recurrida declarando nula la comprobación de valores 4239/98 realizada por el Servicio Territorial de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, conforme a lo vertido en el cuerpo de este escrito y asimismo se declare que el valor del bien objeto del presente procedimiento es de 20.252.123 pesetas a los efectos de determinar la base imponible del mismo».

SEGUNDO Se confirió traslado de la demanda por termino legal a la parte demandada quien contestó a la demanda a medio de escrito de 24-2-03 oponiéndose al recurso solicitando la desestimación del mismo basándose en los fundamentos jurídicos que aduce.

TERCERO Una vez dictado Auto de fijación de cuantía, y recibido el recurso a prueba se practicó con el resultado que obra en autos, y habiendo solicitado las partes la presentación de conclusiones escritas, se evacuó traslado para cumplimentar tal trámite, quedando el recurso concluso para sentencia, y no pudiéndose dictar ésta en el plazo de diez días previsto en el art. 67.1 de la Ley 29/98 (RCL 1998\1741) , al existir recursos pendientes de señalamiento para Votación y Fallo con preferencia, y puesto que el art. 64.3 de la misma Ley, establece que tal señalamiento se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior y existiendo en la Sala recursos conclusos de fecha anterior, y por tanto con preferencia para efectuar su señalamiento al de este recurso, quedaron los autos pendientes de señalamiento de día para Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de

conclusos correspondiese, habiéndose señalado el día 12 de febrero de 2004 para votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Constituye el objeto del presente recurso jurisdiccional la resolución del TEAR de Castilla y León, Sala de Burgos de 28 de mayo de 2001, desestimando la reclamación económico administrativa 40/581/98 interpuesta por el recurrente contra la resolución del Servicio de Economía y Hacienda de la Delegación Territorial de Segovia de la Junta de Castilla y León aprobatoria del expediente de comprobación de valores NÚM. 8753/94, por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, fijando un valor comprobado de 25.344.101 Pesetas (152.321,11 euros) con indicación de que concurren las circunstancias a que se refiere el art. 14.7 del RD Leg. 1/93, de 24 de septiembre (RCL 1993\2849) .

Aduce el recurrente en apoyo de sus pretensiones anulatorias que las resoluciones impugnadas son nulas por cuanto faltan los hechos y elementos adicionales que motivan los aumentos de la base tributaria, lo que además de constituir un quebrantamiento de la norma, coloca al recurrente en indefensión jurídica ante la falta de motivación y ausencia de los elementos argumentales esgrimidos por la Administración, argumentando que en todo caso carece de justificación el desproporcionado aumento de valoración del bien objeto de comprobación en relación con otra valoración realizada por la propia Administración con relación a ese mismo inmueble trece meses antes, habiéndose producido un incremento del 19,5% del valor estimado de los mismos en tan breve período de tiempo.

Tales pretensiones son rebatidas puntual y detalladamente de contrario, interesándose la desestimación del recurso, por entender que las resoluciones impugnadas son conformes a derecho.

SEGUNDO Antes de comenzar el análisis de las diversas cuestiones suscitadas, es preciso concretar los hechos de los que trae causa el presente recurso, debiendo reseñarse al efecto que mediante escritura pública otorgada el 28 de octubre de 1994 ante el Notario de Segovia Don Manuel Fermín Domínguez Rodríguez, el hoy recurrente adquirió una vivienda y una plaza de garaje en la Calle... núm. ... en Segovia. En dicha escritura se fijó como valor de adquisición la cantidad de 18.150.000 Pesetas (109.083,7 euros), valor por el que se presentó autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

Con fecha 10-10-98 se notificó al recurrente el resultado de la comprobación de valores llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León con base en el informe pericial realizado dentro del expediente núm. 8753/94 con el número 4239/98 de 19 de junio de 1998, elaborado por el Arquitecto Técnico de la Administración Don Ramón, del que resultaba un valor total del inmueble transmitido de 25.344.101 Pesetas (152.321,11 euros).

En dicho informe tras identificar el bien por la localidad, Segovia; el sitio, la naturaleza del bien y los usos considerados, expone lo que denomina «metodología de valoración» en la que se explica que se han tomado como base la 2692/96, con similares características, del archivo histórico de valoraciones, actualizada a la fecha del hecho imponible por el técnico que suscribe, en ejercicio de sus competencias y atribuciones, según los valores de realización contemplados en los estudios de mercado efectuados por la Junta de Castilla y León que se encuentran en las oficinas del Servicio Territorial a disposición del interesado, y según su criterio basado en su capacitación, en su conocimiento del mercado local y en las características del bien objeto de valoración.

En el siguiente apartado define las características consideradas respecto de la localidad: quinta categoría de catorce, la zona según su uso o atractivo: residencial o comercial bueno, y los servicios urbanos: cinco de electricidad, agua, alcantarillado, accesos y aceras.

A continuación procede a la valoración multiplicando la superficie del suelo y de la construcción por los precios resultante por m² en tal metodología de valoración.

Notificado al recurrente el resultado de la comprobación de valores, interpuso reclamación económica administrativa en la que tras efectuar las alegaciones recayó la resolución objeto del presente recurso jurisdiccional. Recurso en el que a instancias del recurrente se ha aportado con la demanda un informe pericial.

TERCERO Establecidas las precedentes premisas fácticas, procede entrar a examinar los distintos motivos de impugnación esgrimidos por el recurrente, y en concreto, la denunciada ausencia de los hechos y elementos adicionales que motivan los aumentos de la base tributaria, lo que además de constituir un quebrantamiento de la norma, coloca a la recurrente en indefensión jurídica ante la falta de motivación de la Administración.

Llegados a este punto, hemos de precisar que esta Sala ha venido considerando en múltiples resoluciones que la comprobación y valoración efectuada por la Administración exige una motivación que sea suficiente para que el interesado tenga pleno conocimiento de la valoración efectuada y pueda solicitar, en su caso, tasación pericial contradictoria.

Ahora bien, se venía entendiendo que el art. 124.1 de la LGT (RCL 1963\2490) , no obliga a la Administración a una motivación exhaustiva de los aumentos de la base imponible, sino que basta con una motivación que sea suficiente para que el interesado tenga pleno conocimiento de la valoración efectuada y pueda solicitar, en su caso, tasación pericial contradictoria, considerando este Tribunal que las valoraciones que venían efectuando los Técnicos de la Administración estaban suficientemente motivadas, y que los interesados tenían conocimiento de los hechos y elementos adicionales que motivaban el aumento de la base tributaria, ya que la Administración efectuaba la comprobación exponiendo las circunstancias por las que incrementaba el valor de lo declarado, y con base en estas consideraciones, se venía exigiendo la práctica de prueba que demostrase, que los datos utilizados por la

Administración no eran correctos, o bien la práctica de pruebas periciales que pudiesen desvirtuar las valoraciones de la Administración.

Sin embargo, esta postura, ha sido reconsiderada progresivamente por esta Sala, primero, mediante pronunciamientos puntuales y con el carácter de «obiter dicta» -sentencia de 11-10-02 (PROV 2003\968) (recurso 64/01), de 16-10-02 (PROV 2002\258041) (recurso 10/01) y de 11-11-02 (PROV 2002\275959) (recurso 307/01)- y posteriormente, ya de forma clara y contundente, en sentencia de 18-11-02 (PROV 2003\15375) (recurso 382/01) y en la recaída en el recurso 199/01 (JT 2003\170) , así como otras posteriores.

En efecto, como señala la STS de 3-12-99 (RJ 1999\9271) -recordando la doctrina fijada en relación con la debida motivación de las comprobaciones de valores realizadas por la Administración Tributaria- todo informe pericial (y los tributarios también) que han de servir de base a la comprobación de valores, deben ser:

1. Fundados, lo cual equivale a expresar los criterios, elementos de juicio o datos tenidos en cuenta; para que el contribuyente pueda conocer sus fundamentos técnicos y prácticos.

2. Fundamentación que también es una garantía tributaria ineludible;

3. Que aun pudiendo ser lacónica y sucinta, no es admisible, ex art. 121 de la LGT (RCL 1963\2490) , si se omiten o se consignan meras generalizaciones sobre los criterios de valoración o sólo referencias genéricas a los elementos tenidos en cuenta mediante fórmulas repetitivas proformadas. Debe ser individualizada.

4. Debe ser notificada al contribuyente.

Casuísticamente, la jurisprudencia advierte que la aplicación de «precios medios» no puede hacerse presumiendo la certeza de éstos, sino que se requiere la justificación de las razones de su formulación y de su aplicación a los bienes concretos, se debe especificar la forma en que se han tomado en consideración esas circunstancias, siempre claro está de un modo detallado (STS 3ª SEC. 2ª de 12-11-1999 [RJ 1999\7828] , Rec. 7816/1992). Esta misma sentencia, concluye con el deber de los Peritos de la Administración de: 1) comprobar en cada caso los bienes, 2) describirlos y 3) facilitar a los órganos administrativos y jurisdiccionales los antecedentes de hecho suficientes para admitir o rechazar las valoraciones. Por todo ello, mientras no se cumplan estas garantías, por desconocimiento de los datos e imposibilidad de analizar y contrastar la valoración, ésta ha de rechazarse (STS de 7 de mayo de 1998 [RJ 1998\3944] , de 30 de mayo [RJ 1995\2423] y 19 de octubre de 1995 [RJ 1995\7414]).

En consecuencia, la simple manifestación de haber tenido en cuenta la situación, calidad, y edad de la construcción, menciones genéricas tampoco es suficiente (STS de 4 de diciembre de 1993 [RJ 1993\10058]).

Y en esta revisión de posturas, se ha dicho obiter dicta (Sentencia de este Tribunal de 11-10-02 [PROV 2003\967] , recurso 372/00), que es inadmisibile que el inmueble aun cuando es descrito por el perito de la Administración, lo hace sin el suficiente detalle y sin haber sido examinado personalmente por ese técnico. Resultando también censurable que toda la valoración venga apoyada en valores unitarios obtenidos de los estudios de mercado efectuados por la Junta de Castilla y León sin ser aportados al expediente administrativo. Sin excusas, esa valoración debe constar aportada al expediente, pues de otro modo el administrado no puede verificar ni tan siquiera si existe un mero error aritmético o de transcripción. No es óbice para su aportación su volumen o complejidad física pues no necesario que se realice de modo total sino sólo de aquellos valores circunstancias a aplicar a la valoración de que se trata, lo que se corrobora de forma detallada y especificada en la sentencia dictada en el recurso 199/01 (JT 2003\170) , en la que se concluye que: para los procedimientos tributarios a los que no les sea de aplicación la Ley 1/98, de 26 de febrero (RCL 1998\545) reguladora de los Derechos y Garantías de los Contribuyentes, por razones de eficacia temporal, la designación del valor unitario tomado del estudio de mercado debe hacerse de un modo concreto, es decir, de un modo tan directo, preciso e inequívoco que el contribuyente pueda acudir sin dudas al oportuno estudio de mercado y averiguar el apartado exacto de donde ha sido tomado ese valor unitario que se le ha aplicado, precisándose que para los procedimientos tributarios tramitados ya bajo la vigencia de la Ley 1/98, de 26 de febrero reguladora de los Derechos y Garantías de los Contribuyentes, es precisa la aportación parcial del Estudio de Mercado de donde se han obtenido esos valores unitarios. No se trata de aportar al expediente la totalidad del Estudio, sino sólo de aquella parte del mismo utilizada en el expediente de que se trate. Y ello porque la interpretación que a juicio de esta Sala ha de hacerse de este apartado 2 del artículo 114 de la LGT (RCL 1963\2490) , debe ser en relación con lo más arriba expuesto y en concreto con la obligación por parte de la Administración Tributaria de ser respetuosa, servicial y facilitadora para con el contribuyente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, debiendo recordarse que la Ley 1/98, es de igual rango que la LGT, y nace con igual vocación programática, siendo necesario, siquiera «ad futuro» una interpretación integradora de ambos textos. Por ello, nada impide a la Administración el adjuntar parcialmente el oportuno Estudio de Mercado. Dicho de otro modo, con la Ley 1/98, la Administración cumplirá las previsiones del artículo 114.2 de la LGT con la traída al expediente administrativo de que se trate de esos elementos de prueba concretos que estuviesen en su poder.

No es admisible, en consecuencia, que se remita al interesado a aquellos registros o estudios para la comprobación de un dato fáctico absolutamente esencial para analizar si la valoración que se discute se halla suficiente y correctamente motivada y si ha sido realizada válidamente. Sólo los hechos notorios, o los admitidos por el interesado quedan exentos de su prueba y por tanto de su aportación al expediente administrativo. Si no existe copia documental, certificado u otro documento público u oficial que acredite la valoración fiscal o de mercado o cualquier otro dato de significación tributaria en el expediente administrativo, tenido en cuenta por la Administración y explicitado en su acto, la Administración Tributaria no está motivando correctamente su valoración.

Por tanto, esa omisión o falta de aportación probatoria supone una conducta procedimental inadmisibile al

imponer al administrado una nueva carga como es acudir al estudio de mercado o al registro fiscal de que se trate para contrastar esos datos, lo que incluso puede llegarle a suponer un nuevo gasto en forma de tasa. Si se admitiese esta postura, la Administración podría pretender la explicación del marco legal aplicable en que fundamente jurídicamente su valoración por una simple remisión a los diarios oficiales en que se hubiese publicado la norma, sin mencionarla, lo cual resulta obviamente inadmisibile.

En parecidos términos, la STSJ Andalucía (Sevilla) de 23-04-2001, Rec. 194/1999 (PROV 2001\301624) recuerda que aunque el perito de la Administración se limitó a multiplicar la superficie de las parcelas por un valor por metro cuadrado, sin aplicación de coeficientes correctores, lo esencial fue la falta de indicación alguna del modo en que se ha obtenido el valor de referencia que se aplica a la superficie de las parcelas, ya que la remisión a unos estudios de mercado efectuados por la Administración que ni siquiera se aportan resulta insuficiente y desconocidos por el contribuyente que se ve imposibilitado para rebatirlos. Más lejos llega la SAN, SEC. 3ª de 10-04-2001, Rec. 80/2001 (PROV 2001\183111) al recordar la necesidad de que el interesado conozca los elementos y método de cálculo utilizado y las fuentes de los valores aplicados.

Como hemos dicho, la STS de 12-11-1999, rec. 7816/1992 (RJ 1999\7828) , dispone el deber de los Peritos de la Administración de 1) comprobar en cada caso los bienes, 2) describirlos, y 3) facilitar a los órganos administrativos y jurisdiccionales los antecedentes de hecho suficientes para admitir o rechazar las valoraciones. Por ello, mientras no se cumplan estas garantías, por desconocimiento de los datos e imposibilidad de analizar y contrastar la valoración, ésta ha de rechazarse (STS de 7 de mayo de 1998 [RJ 1998\3944] , de 30 de mayo [RJ 1995\2423] y 19 de octubre de 1995 [RJ 1995\7414]).

Ahondando en la cuestión, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2002 (RJ 2002\5913) concluye con toda rotundidad en un supuesto similar que «La utilización de estadísticas y de relaciones de precios mínimos o medios puede servir para que la Administración decida aceptar la declaración del contribuyente, si su contenido se ajusta o aproxima a aquellos baremos o, en caso contrario, resolver practicar la comprobación de valores, pero nunca pueden ser tales datos genéricos motivación suficiente de aquélla».

Consecuentemente, mientras no se exprese por la Administración en sus valoraciones los criterios seguidos, los datos fácticos tenidos en cuenta, los procedimientos concretos de aplicación, ponderación, actualización, extrapolación o individualización, todo ello glosado de un modo sucinto, pero suficiente, completo y adecuado para poder tomar cabal conocimiento de las operaciones realizadas por el Sr. Perito de la Administración y poder verificar su corrección, esta Sala no puede admitir la validez de esas comprobaciones.

CUARTO Aplicados estos criterios al presente caso, resulta clara la estimación del recurso con relación a este extremo, ya que al margen de no constar en autos los resultados de los estudios de mercado, que se dice sirven de base para la determinación de los valores unitarios, además del propio informe resulta que no se emplean directamente los resultados de ese estudio de mercado, sino que se actualizan y ponderan a la fecha del hecho imponible, y no sabemos que parámetros de ponderación y actualización se utilizan, con lo cual nos encontramos con unos precios medios finales utilizados en la valoración, que se ignora de dónde proceden y cómo se ha llegado a su determinación, por lo que procede estimar el recurso con relación a tal extremo y anular las resoluciones impugnadas por no ser conformes a derecho.

QUINTO Ahora bien, el recurrente pretende no solo que se anule la valoración realizada por la administración por falta de motivación, sino que además se declare que el valor del bien objeto del presente procedimiento es de 20.252.123 pesetas a los efectos de determinar la base imponible del mismo, que es el valor asignado en el informe pericial aportado con su escrito de demanda.

Al efecto tenemos que la STS de 4-2-95 (RJ 1995\3284) señala que no existe un precepto de Ley que prohíba la práctica de la prueba pericial, dentro del proceso Contencioso-Administrativo, para contradecir lo valorado por el Perito de la Administración, prohibición que sería necesario hacer por norma con rango de Ley (en el supuesto de que ello no fuera inconstitucional por infringir el artículo 24.2 de la Constitución [RCL 1978\2836] , al limitarse los medios de prueba) y no por meras opiniones doctrinales.

Aparte de ello, la prueba pericial a practicar en vía Contencioso-Administrativa se rige por las sencillas normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEG 1881\1) y sin restricción o limitación alguna, frente al complejo procedimiento que establece el artículo 52.2 de la Ley General Tributaria (RCL 1963\2490) , que además, limita la tasación pericial contradictoria apartado 2 del número 2, exigiendo, además unos desembolsos del sujetos pasivo apartado 2 párrafos 5, 6 y 7 que hacen prácticamente prohibitiva o al menos muy dificultosa esta impugnación.

No existen, por lo tanto, razones, que impidan combatir las valoraciones de los peritos de la Administración en los expedientes de comprobación de valores, mediante prueba pericial solicitada y acordada en período probatorio del recurso Contencioso-Administrativo en que se impugne la valoración resultante de la comprobación, ya que los términos del apartado 2 del artículo 52 de la Ley General Tributaria no autorizan a sostener lo contrario, puesto que se limita a decir que el sujeto pasivo podrá, en todo caso, promover la tasación pericial contradictoria... dentro del plazo de la primera reclamación que proceda contra la liquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados administrativamente, o cuando así estuviera previsto, contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado. Frente a estos términos, deben de prevalecer los de la Ley de la Jurisdicción, que modula la admisión de la prueba en función de dos circunstancias: la conformidad o discrepancia de las partes sobre los hechos y que éstos sean o no trascendentes para el fallo. Es, precisamente esa prueba lo que (al igual que lo que antecede, son palabras de la Exposición de Motivos de la Ley de la Jurisdicción) confiere al proceso Contencioso las garantías necesarias para que constituya un perfecto instrumento de la Administración de Justicia, que no puede

impartirse con la mediatización de las posibilidades probatorias de las partes ante el órgano jurisdiccional.

Sería, por lo tanto, contrario al espíritu que informa la Ley de la Jurisdicción e incluso contrario al artículo 24 de la Constitución, limitar los medios de prueba del ciudadano, convertido en sujeto pasivo frente a la Administración, y entender que la comprobación de valores por la Administración solamente puede ser combatida mediante prueba pericial contradictoria en vía administrativa, prohibiéndola en vía jurisdiccional si en vía administrativa no se practicó.

Aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa, nos encontramos con que el recurrente ha aportado junto con su escrito de demanda un informe pericial en el que valora el bien objeto de transmisión en 20.252.123 Pesetas (121.717,71 euros).

En tal informe se consigna dentro del apartado de Metodología de valoración, que se ha tomado como base las valoraciones 4239/98, 2692/96 y 2693/96, referidas todas a la misma vivienda y plaza de garaje, y según el criterio del Arquitecto Técnico que suscribe tal informe basado en su experiencia profesional, así como en la información sobre el estado real del inmueble en la fecha del hecho imponible, su conocimiento del mercado inmobiliario y en las características del bien objeto de valoración.

A la vista de tales argumentaciones hemos de concluir que el informe pericial aportado a los autos incurre en los mismos defectos de motivación que el recurrente denuncia e imputa al informe del perito de la Administración, por lo que teniendo en cuenta que el mismo nivel de exigencia de motivación que se exige a la Administración, ha de exigirse igualmente al resto de los informes periciales, hemos de concluir que el informe aportado con la demanda no puede servir para declarar que el valor obtenido es el de 20.252.123 Pesetas (121.717,71 euros), como pretende el recurrente en su escrito de demanda.

En consecuencia, aunque procede estimar el recurso y anular la comprobación de valores por no estar suficientemente motivada, la estimación ha de ser parcial pues han de retrotraerse actuaciones para que se motive adecuadamente al no poderse aceptar el informe pericial aportado por adolecer de similares defectos de motivación que se denuncian respecto del informe de la Administración.

Ahora bien, como ha reconocido el Tribunal Supremo en sendas sentencias de 8 (RJ 1996\8464) y 29 de noviembre de 1996 (RJ 1996\8476) en recursos de casación para unificación de doctrina, la falta de motivación suficiente es un defecto formal que a lo que da lugar es a la retroacción de actuaciones para que se motive suficientemente, con lo cual no se puede hablar de nulidad radical; criterio el expuesto, que ha sido seguido por esta Sala en diversas resoluciones, por lo que procede únicamente la estimación parcial del recurso interpuesto, sin que por tanto sea preciso el examen de las demás cuestiones suscitadas en la demanda rectora del presente recurso jurisdiccional.

SEXTO No se aprecian causas o motivos que justifiquen una especial imposición de costas, de conformidad con el art. 139.1 de la Ley 29/98 (RCL 1998\1741) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha dictado el siguiente:

FALLO

Estimar parcialmente el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la Procuradora Doña Carmen Velázquez Pacheco en nombre y representación de Don Ricardo contra las resoluciones reseñadas en el encabezamiento de esta sentencia, las que se anulan y dejan sin efecto por no ser conformes a derecho, de conformidad con lo razonado en los Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto de la presente resolución; y todo ello sin hacer especial imposición de costas.

Contra esta resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Una vez firme esta sentencia, devuélvase el expediente administrativo al Órgano de procedencia con certificación de esta resolución para su conocimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la Sentencia anterior por la Ilmo. Sra. Magistrada Ponente Sra. García Vicario, en la sesión pública de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), que firmo en Burgos a trece de febrero de dos mil cuatro, de que yo el Secretario de Sala, certifico.

Ante mí.

Véase el Libro de Registro de Sentencias al numero ... y folio ...

- Cita y aplica en el mismo sentido. STS Madrid 23 mayo 2002. (RJ 2002\5913)
- Cita y aplica en el mismo sentido. STS Madrid 03 diciembre 1999. (RJ 1999\9271)
- Cita y aplica en el mismo sentido. STS Madrid 12 noviembre 1999. (RJ 1999\7828)
- Cita y aplica en el mismo sentido. STS Madrid 07 mayo 1998. (RJ 1998\3944)
- Cita y aplica en el mismo sentido. STS Madrid 19 octubre 1995. (RJ 1995\7414)
- Cita y aplica en el mismo sentido. STS Madrid 13 marzo 1995. (RJ 1995\2423)
- Cita y aplica en el mismo sentido. STS Madrid 04 febrero 1995. (RJ 1995\3284)
- Cita y aplica en el mismo sentido. STS Madrid 04 diciembre 1993. (RJ 1993\10058)
- Cita y aplica en el mismo sentido. SAN Madrid 10 abril 2001. (JUR 2001\183111)
- Cita y aplica en el mismo sentido. STSJ Castilla y León (Burgos) 26 noviembre 2002. (JT 2003\170)
- Cita y aplica en el mismo sentido. STSJ Castilla y León (Burgos) 18 noviembre 2002. (JUR 2003\15375)
- Cita y aplica en el mismo sentido. STSJ Castilla y León (Burgos) 11 noviembre 2002. (JUR 2002\275959)
- Cita y aplica en el mismo sentido. STSJ Castilla y León (Burgos) 16 octubre 2002. (JUR 2002\258041)
- Cita y aplica en el mismo sentido. STSJ Castilla y León (Burgos) 11 octubre 2002. (JUR 2003\967)
- Cita y aplica en el mismo sentido. STSJ Castilla y León (Burgos) 11 octubre 2002. (JUR 2003\968)
- Cita y aplica en el mismo sentido. STSJ Andalucía (Sevilla) 23 abril 2001. (JUR 2001\301624)

Relaciones Pasivas:

- Citada y aplicada en el mismo sentido. En lo que se refiere a la reiteración de la comprobación de valores anulada por falta de motivación suficiente. STSJ Cataluña 27 octubre 2005. (JT 2006\735)

Voces:

TRIBUTOS-GESTION

COMPROBACION DE VALORES

Dictamen de los peritos de la Administración

Requisitos: fundamentación adecuada del informe

Motivación insuficiente: falta de consignación de los procedimientos concretos de aplicación, ponderación, actualización, extrapolación o individualización de los valores unitarios aplicados: retroacción de actuaciones procedente:

[F. 3, 4 y 5]

Motivación mediante remisión del contribuyente a los registros fiscales o estudios de mercado realizados por la propia administración tributaria: requisitos para su admisibilidad: examen: diferenciación entre procedimientos tributarios sometidos a la regulación anterior y posterior a la Ley 1/1998, de 26 febrero:

[F. 3]

Motivación mediante remisión del contribuyente a los registros fiscales o estudios de mercado realizados por la propia administración tributaria: requisitos para su admisibilidad: examen: necesidad de aportación: examen de la doctrina jurisprudencial:

[F. 3]

TRIBUTOS-GESTION

COMPROBACION DE VALORES

Dictamen de los peritos de la Administración

Impugnación

Admisibilidad de informe pericial en vía jurisdiccional: procedencia:

[F. 6]

Notas de Redacción:

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales. Editorial Aranzadi no se hace responsable de los errores que en materia de Protección de Datos de Carácter Personal pudiera adolecer esta versión oficial.

Disposiciones Aplicadas:

- Ley 230/1963, de 28 diciembre (RCL 1963\2490)- art. 124: norma aplicada en fundamento 3.